



Comunidad de Madrid

MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DEL SUMINISTRO DE 5.000 MEDIDORES DE DIOXIDO DE CARBONO Y SU DISTRIBUCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.

Ante la magnitud que comenzaba a alcanzar la pandemia, en España se adoptaron medidas inmediatas para evitar la propagación de la enfermedad entre los que se encuentra la declaración del estado de alarma en todo el país mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Tras el fin de la vigencia del estado de alarma España, que había sido prorrogado en varias ocasiones, el país entró en una etapa de desescalada para alcanzar una nueva normalidad, adoptándose medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios.

Estas medidas, tanto a nivel nacional como regional, tenían como objetivo común, la prevención de situaciones de riesgo, la intensificación de las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y el refuerzo de los servicios asistenciales y de salud pública.

No obstante, en el momento actual en España, al igual que en la mayoría de países europeos, se registra una tendencia ascendente en el número de casos.

Teniendo en cuenta que este nuevo virus tiene una gran capacidad de expansión entre la población, con un índice de propagación R_0 de entre 1,4 y 3,5, según los casos, y para el que actualmente se tardará mucho tiempo en disponer de los medios farmacológicos para proteger a la población, siendo actualmente la prevención junto con las medidas de higiene y distanciamiento social, una de las más eficaces medidas de lucha contra la enfermedad.

Como principal vía de contagio, se ha detectado la vía aérea, siendo los aerosoles relevantes en dicha transmisión, sobre todo en ambientes cerrados y sin ventilación.

En el ámbito educativo, ante la detección de los primeros casos en España, la Comunidad de Madrid comienza adoptando mediante la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

En el artículo primero de esta Orden 338/2020, de 9 de marzo, se acuerda "*La suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación*", recomendado continuar las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on-line.

Una vez superados los momentos más críticos de la expansión de la enfermedad, y ante la necesidad de retomar una nueva normalidad, en el ámbito educativo, el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que se dicta en el proceso de desescalada, se establece que "*Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por*





los titulares de los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan.

El BOCM de 21 septiembre 2020 recoge la Orden 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 señalando la obligación de realizar tareas de ventilación frecuente.

El 3 de noviembre la Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid dicta unas instrucciones para la correcta ventilación de los centros educativos, ref. 49/623920.9/20. En dichas instrucciones se recomienda la ventilación natural en los espacios cerrados para evitar la transmisión del coronavirus por aerosoles, así como la reducción de los aforos y el uso de la mascarilla. Un buen indicador del nivel de ventilación de un espacio es la concentración del CO2 en el mismo, por lo que su medición y control es el instrumento en el que basar los criterios de ventilación, para lo que los equipos de medición resultan fundamentales.

Dentro del marco normativo español, la contratación pública para casos de excepcionalidad está perfectamente reglada en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). Así, el citado artículo 120 establece que:

"1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

(. . .)

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.(...)"

En el caso planteado del COVID-19, con efectos que lejos de remitir parecen rebrotar en múltiples puntos, se requieren actuaciones contundentes que eviten una situación como la vivida en los meses precedentes que dieron lugar a la declaración del estado de alarma y que se hacen especialmente urgentes por el grave peligro de contagio durante el curso escolar sin las medidas de prevención adecuadas. La situación resulta





especialmente grave y peligrosa, no solo por la naturaleza de la población afectada, sino también por su distribución territorial, lo que justifica la contratación de los medios necesarios bajo un régimen excepcional. La asociación de los efectos del COVID-19 y la necesidad de hacer uso de medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas para combatirlo ya quedó puesta de manifiesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 que establecía que *“La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” lo que conducía a la asociación de grave peligro y existencia del COVID-19 en la sociedad de forma inequívoca al establecer “todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia”*

Así, la contratación del suministro y distribución de medidores de dióxido de carbono para aulas testigo se encontraría justificada por su carácter de urgencia y su necesidad para evitar un riesgo grave para la salud según lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP y en consecuencia susceptibles de su contratación sujeto a al carácter de tramitación de emergencia.

Se estima que es necesario servir 5.000 medidores de dióxido de carbono, que se entregarían directamente en los centros y con carácter inmediato, estimándose su coste en 745.000 €.

En consecuencia, la contratación del suministro de detectores de dióxido de carbono en centros educativos como medida de prevención contra el COVID- 19 es una necesidad sobrevenida y totalmente justificada que deriva las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia y ha de ser atendida con toda celeridad y urgencia, no siendo factible otra forma de contratación distinta a la tramitación de emergencia de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP y artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo.

Madrid, 12 de noviembre de 2020

EL DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCUTRAS Y SERVICIOS

Fdo.: Ignacio García Rodríguez

